

MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO DEL ANTEPROYECTO DE LEY POR LA SE MODIFICA LA LEY 20/1998, DE 27 DE NOVIEMBRE, DE ORDENACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRANSPORTES URBANOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

FICHA DE RESUMEN EJECUTIVO			
Órgano proponente	Dirección General de Transportes y Movilidad	Fecha inicial:	17 febrero 2022
Título de la norma	Anteproyecto de ley por la que se modifica la ley 20/1998, de 27 de noviembre, de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid		
Tipo de memoria	Extendida x Ejecutiva <input type="checkbox"/>		
OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA			
Situación que se regula	Modificación de una norma con rango de ley para introducir la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor en la normativa de Comunidad de Madrid como una modalidad de transporte de viajeros habilitando a los titulares de las autorizaciones de arrendamiento con conductor de ámbito nacional, domiciliadas en la comunidad de Madrid, existentes a su entrada en vigor, y solo a éstas, a seguir realizando servicios de carácter urbano a partir de octubre de 2022.		
Objetivos que se persiguen	Incorporar la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor en la normativa de la Comunidad de Madrid como modalidad de transporte discrecional de viajeros y habilitar a los titulares de las autorizaciones de ámbito nacional, domiciliadas en la Comunidad de Madrid, existentes a la entrada en vigor de esta modificación, y solo a éstas, para seguir realizando servicios de carácter urbano cuando transcurran las habilitaciones temporales previstas en el Real Decreto-Ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento con conductor		
Principales alternativas consideradas	No se han considerado.		

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO	
Tipo de norma	Ley
Estructura de la norma	Contiene una parte expositiva, un artículo único y una disposición final única
Informes	<ul style="list-style-type: none"> - Informe de coordinación y calidad normativa. - Informe de la Dirección General de Igualdad sobre el impacto por razón de género y el impacto, sobre la orientación sexual e identidad y expresión de género. - Informe de la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, sobre el impacto en la familia, infancia y adolescencia. - De las secretarías generales técnicas de las distintas consejerías. - De la de la Secretaría General Técnica de Transportes e Infraestructuras. - Del Consejo de Consumo. - Del Comité Madrileño de Transporte por Carretera. - De la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.
Trámite de consulta pública previa	<p>El proyecto fue sometido a información pública entre las fechas 13/02/2021 al 27/02/2021.</p> <p>Si bien, por Orden de 16 de febrero de 2022 del Consejero de Transportes e Infraestructuras, se ha declarado su tramitación por urgencia.</p>
Trámite de audiencia e información públicas	<p>El trámite de audiencia e información públicas se realizará en el Portal de Transparencia, reduciendo su plazo de duración a siete días hábiles, como consecuencia de la declaración de urgencia de la tramitación, adoptada por Orden del Consejero de Transportes e Infraestructuras de fecha 16 de febrero de 2022, y en virtud del artículo 9 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula y simplifica el procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas de carácter general en la Comunidad de Madrid y el artículo 60 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y Participación.</p>

ANÁLISIS DE IMPACTOS	
Adecuación al orden de competencias	La Comunidad de Madrid, en cumplimiento de la previsión contenida en el artículo 148.1.5ª de la Constitución Española, y de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 26.1.6 de su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, tiene competencia sobre el transporte por carretera que se desarrolle íntegramente en su ámbito territorial; asimismo, el artículo 21.d) la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid.
Impacto económico y presupuestario	<p>Efectos sobre la economía en general</p> <p>Se posibilita a las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor, domiciliadas en la Comunidad de Madrid, existentes a su entrada en vigor a que puedan seguir realizando transporte urbano a partir de octubre de 2022, una actividad económica con incidencia en el sector de la automoción, fabricantes y concesionarios de vehículos y que genera cerca de 20.000 puestos de trabajo, directos e indirectos.</p>
	<p>En relación con la competencia</p> <p><input type="checkbox"/> La norma no tiene efectos significativos sobre la competencia.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> La norma tiene efectos positivos sobre la competencia</p> <p><input type="checkbox"/> La norma tiene efectos negativos sobre la competencia</p>
	<p>Desde el punto de vista de las cargas administrativas</p> <p><input type="checkbox"/> Supone una reducción de cargas administrativas.</p> <p><input type="checkbox"/> Incorpora nuevas cargas administrativas.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No afecta a las cargas administrativas.</p>

	Desde el punto de vista de los presupuestos de la Comunidad de Madrid, la norma	<input type="checkbox"/> Afecta a los presupuestos de la Administración de la Comunidad de Madrid. <input checked="" type="checkbox"/> No afecta a los presupuestos de la Administración de la Comunidad de Madrid <input type="checkbox"/> Implica un gasto. <input type="checkbox"/> Implica un ingreso.
	La norma tiene un impacto por razón de género	<input type="checkbox"/> Negativo <input checked="" type="checkbox"/> Nulo <input type="checkbox"/> Positivo
	La norma tiene un impacto de infancia, adolescencia y familia	<input type="checkbox"/> Negativo <input checked="" type="checkbox"/> Nulo <input type="checkbox"/> Positivo
	La norma tiene un impacto de orientación sexual e identidad de género	<input type="checkbox"/> Negativo <input checked="" type="checkbox"/> Nulo <input type="checkbox"/> Positivo
Otras Consideraciones	Ninguna	

INTRODUCCIÓN

La presente memoria extendida se elabora de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula y simplifica el procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas de carácter general en la Comunidad de Madrid y de las Instrucciones Generales para la aplicación del procedimiento para el ejercicio de la iniciativa legislativa y de la potestad reglamentaria, aprobadas por Acuerdo de 5 de marzo de 2019, del Consejo de Gobierno, en lo que no se opone al decreto.

1. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA

a) Fines y objetivos

El artículo 149.1.21^a de la Constitución Española, otorga al Estado competencia exclusiva sobre los transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una comunidad autónoma, habiendo delegado dichas funciones, mediante la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los Transportes por Carretera y por Cable, en las comunidades autónomas.

La finalidad de la citada delegación de competencias era el establecimiento y mantenimiento de un sistema común de transporte en todo el Estado y evitar disfunciones territoriales, por la aplicación de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y sus normas de desarrollo, en las distintas comunidades autónomas.

Mediante la sentencia del Tribunal Constitucional 118/1996, de 27 de junio, fueron declarados nulos los artículos 113 a 118 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, referidos al transporte urbano de viajeros, así como el párrafo 2 del artículo 2, por considerar que la regulación que hacía el Estado de los transportes urbanos comportaba una extralimitación competencial.

Por ello, al objeto de evitar el vacío normativo, la Comunidad de Madrid dictó la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid, en la que se regula el transporte urbano de viajeros y su coordinación con los transportes interurbanos, siendo de aplicación a todos los transportes urbanos que se desarrollen íntegramente en el territorio de la misma.

La Ley 20/1998, de 27 de noviembre, no contempla en su regulación la actividad del arrendamiento de vehículos con conductor, ya que hasta la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su

ejercicio (es decir, a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, por la que incorpora parcialmente a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2006/123/CE), dicha actividad no tiene, a los efectos de la legislación de ordenación de los transportes, la consideración de transporte discrecional de viajeros, sino de actividad auxiliar y complementaria de transporte.

Tras diversos cambios normativos producidos en las normas estatales en relación a la materia de arrendamiento con conductor, el Real Decreto-Ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento con conductor, determina que las autorizaciones de transportes de arrendamiento con conductor de ámbito nacional, que antes habilitaban para realizar transporte urbano e interurbano, pasan a habilitar para realizar exclusivamente transporte interurbano.

Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo con la disposición transitoria única del mismo, durante los cuatro años siguientes a su entrada en vigor, los titulares de este tipo de autorizaciones podrían continuar prestando a su amparo servicios de ámbito urbano; plazo ampliable, de forma excepcional, dos años más, contados a partir del periodo del plazo de cuatro años, como indemnización compensatoria, cuando se acredite que la inversión realizada supera los cuatro años.

Por tanto, en caso de que por la Comunidad de Madrid no se estableciera una regulación al efecto, a la finalización de los plazos indicados, los titulares de las autorizaciones de arrendamiento con conductor (VTC-nacional), domiciliadas en la Comunidad de Madrid, no podrían seguir prestando servicios urbanos, y solo podrían realizar servicios de carácter interurbano.

De acuerdo con los datos del Registro de Empresas y Actividades de Transporte, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a la fecha de elaboración de esta memoria existen en la Comunidad de Madrid 8.425 autorizaciones VTC-nacional en alta y 508 en baja recuperable.

Una autorización de transporte está en baja recuperable cuando, de acuerdo a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, está en suspenso por haber constatado la Administración el incumplimiento de alguna de las condiciones exigidas en el artículo 43, y, si el incumplimiento que da lugar a la suspensión no se subsana con anterioridad a la finalización del más próximo visado, la autorización perderá validez sin necesidad de una declaración expresa por parte de la Administración (artículo 51.1).

El visado de las autorizaciones es la comprobación que se hace bienalmente para verificar que las empresas cumplen los requisitos y condiciones para el mantenimiento de las autorizaciones; se realiza conforme el calendario previsto por la Dirección General de Transporte Terrestre, del Ministerio de Transporte de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de fecha 3 de diciembre de 2018, si bien con motivo del COVID-19, el visado de las autorizaciones previsto para el año pasado 2020 (autorizaciones de transporte de mercancías) fue pospuesto para el año 2021, y el de las autorizaciones para el transporte de viajeros, entre las que se encuentran las de la clase VTC, para el año 2022.

En definitiva, las autorizaciones VTC que se encuentren en baja recuperable y cuyos titulares no procedan a su visado en 2022, perderán su validez de forma definitiva.

La actividad de arrendamiento de vehículo con conductor en la Comunidad de Madrid, constituida por 8.425 autorizaciones en alta y otras 508 en situación de estarlo, constituye una modalidad de transporte de viajeros que coexiste e interactúa en el mismo segmento de mercado que la modalidad de transporte en vehículo taxi.

Ambas modalidades atienden la demanda de servicios que les realizan los ciudadanos a los que les corresponde elegir mediante que modalidad quieren realizar sus desplazamientos y para ello la Administración tiene que adoptar las medidas necesarias para que aquéllos tengan todas las opciones de entre las existentes, por lo que se precisa establecer la regulación necesaria para que los vehículos con VTC puedan seguir realizando servicios urbanos una vez finalicen

los plazos previstos en la disposición transitoria única del Real Decreto-Ley 13/2018, de 30 de julio, y así los ciudadanos que quieran realizar sus desplazamientos urbanos en esta modalidad de transportes tengan esa opción.

En consecuencia, para alcanzar el objetivo anterior, se hace preciso llevar a cabo una modificación de la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, y la propuesta proyectada contiene la regulación imprescindible para incorporar en la normativa de la Comunidad de Madrid la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor como modalidad de transporte discrecional de viajeros, determinando su marco jurídico, dejando a un desarrollo normativo posterior todos los requisitos y condiciones exigibles para su ejercicio, habilitando a las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor, de ámbito nacional, existentes a la entrada en vigor de la modificación, y solo a éstas, para poder seguir realizando servicios de carácter urbano, en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, a partir de la fecha en que, de acuerdo con lo que se establece en el Real Decreto-Ley 13/2018, de 28 de septiembre, solo puedan realizar servicios de carácter interurbano.

b) Adecuación de los principios de buena regulación

El proyecto normativo se adecua a los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 2 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula y simplifica el procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas de carácter general en la Comunidad de Madrid.

Se cumplen los principios de necesidad y eficacia, en cuanto que la razón de interés general en que se funda es la de incorporar en el marco normativo de la Comunidad de Madrid la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor como modalidad de transporte discrecional de viajeros, posibilitando la realización de los servicios de carácter urbano que se desarrollen dentro de su ámbito territorial, a las autorizaciones de la clase VTC de ámbito nacional existentes, y solo a éstas, a la entrada en vigor de la modificación que se

proyecta, una vez finalizados los plazos temporales establecidos por la disposición transitoria única del Real Decreto-Ley 13/2018, de 28 de septiembre.

En virtud del principio de proporcionalidad, se contiene la regulación imprescindible para conseguir el interés general mencionado el principio de seguridad jurídica queda salvaguardado habida cuenta que con la modificación se ofrece certeza a los titulares de las autorizaciones de arrendamiento de vehículo con conductor de ámbito nacional, expedidas por el órgano de la continuidad en la prestación de los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor, así como que se encuadra de forma coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional y comunitario.

También se adecúa al principio de eficiencia, puesto que la norma no conlleva cargas administrativas innecesarias, y al principio de transparencia, en la medida en que los potenciales afectados por la regulación tendrán la posibilidad de tener una participación activa en su elaboración celebrándose el trámite de audiencia e información públicas, dándose publicidad al proyecto normativo mediante su publicación en el Portal de Transparencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid y con su publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».

c) Análisis de alternativas

No cabe alternativa posible, ya que se trata de contemplar normativamente la actividad de arrendamiento de vehículo con conductor como transporte discrecional de viajeros mediante su incorporación en una ley ya existente, la Ley 20/1997, de 27 de noviembre, por lo que se requiere que el proyecto normativo tenga rango legal y no establecer regulación alguna no parece razonable.

d) Plan Normativo

De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula y simplifica el

procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas de carácter general en la Comunidad de Madrid, la modificación que se propone se encuentra prevista en el Plan Normativo de XII Legislatura, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de noviembre de 2021.

2. CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO

a) Contenido

La Comunidad de Madrid, en ejercicio de su competencia legislativa plena sobre los transportes terrestres que se desarrollan íntegramente en su ámbito territorial, dictó la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid, al objeto de regular los transportes urbanos y su coordinación con los interurbanos realizados en su ámbito territorial y con este proyecto normativo se pretende completar la regulación de los transportes de viajeros de carácter urbano incorporando la modalidad de transporte de viajeros de arrendamiento de vehículos con conductor.

El proyecto normativo consta de una parte expositiva, un artículo único, con cuatro apartados, y una disposición final.

En el **apartado uno** se modifica el nombre del capítulo III, que pasa a denominarse Transporte de Viajeros en Vehículo de hasta 9 plazas, incluido el conductor, y se divide en dos secciones, una dedicada al Transporte de Viajeros en Vehículo de Turismo y la otra al Transporte de Viajeros en Vehículos de Arrendamiento con Conductor.

El **apartado dos** añade, en la sección 2ª, titulada al Transporte de Viajeros en Vehículos de Arrendamiento con Conductor, un artículo 14 ter con dos apartados. En el primero se regula la actividad de arrendamiento con conductor como transporte discrecional de viajeros, cuyo ejercicio queda condicionado a la obtención de una autorización cuyos requisitos se dejan a un posterior desarrollo reglamentario, y se determina que no está sometida a tarifas administrativas, salvo las excepciones que se determinen reglamentariamente.

En el segundo se prevé que las autorizaciones puedan ser denegadas cuando la proporción entre el número de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor autonómicas otorgadas por el órgano competente de la Comunidad de Madrid, junto con las estatales habilitadas para prestar servicios urbanos, y el número de las autorizaciones concedidas para realizar transporte de viajeros en automóviles de turismo domiciliadas en la Comunidad de Madrid sea superior a una de aquéllas por cada treinta de éstas. Los titulares de las autorizaciones, además, no podrán dejar de prestar servicios sin causa justificada.

El **apartado tres** se añade un artículo 14 quáter en la sección 2ª, titulada al Transporte de Viajeros en Vehículos de Arrendamiento con Conductor, en el que se determina que la prestación de servicios urbanos mediante arrendamiento se realizará por los titulares de las autorizaciones cumpliendo con los requisitos y condiciones que se establezcan reglamentariamente.

En el **apartado cuatro** se añade una disposición adicional cuarta a la Ley 20/1997, de 27 de noviembre, en la que se prevé que las autorizaciones de arrendamiento de vehículo con conductor de ámbito nacional domiciliadas en la Comunidad de Madrid, existentes en el momento de la entrada en vigor de la modificación que se propone, y sólo estas, seguirán habilitando para la prestación de servicios de carácter urbano en el ámbito de la Comunidad de Madrid, tras la finalización del plazo de las habilitaciones temporales contempladas en el Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre.

Por último, consta de una disposición final única en la que se dispone que la entrada en vigor será a día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

b) Encaje de la norma en el derecho nacional y en el de la Unión Europea

En relación con el derecho nacional y comunitario la materia sobre la que versa la modificación proyectada es de competencia propia de las comunidades

autónomas, al tratarse de la regulación de servicios que se realizan íntegramente en su ámbito territorial.

Por otra parte, la modificación propuesta no implica discriminación alguna por razón de nacionalidad o residencia ni limitación de ninguno los principios y libertades que garantizan la normativa comunitaria.

c) Vigencia de la norma

La presente propuesta normativa se dicta con una vigencia indefinida, quedando sujeta a ulteriores cambios que hagan necesaria la actualización de su contenido y no supone la derogación de norma alguna.

d) Rango normativo propuesto para el proyecto

El rango normativo propuesto para el proyecto es el de ley ya que viene a modificar una ley preexistente de la Comunidad de Madrid, por lo que el instrumento por el que se modifique debe tener el mismo rango legal.

3. ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA NORMATIVA A LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

La Comunidad de Madrid, en cumplimiento de la previsión contenida en el artículo 148.1.5ª de la Constitución Española, y de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 26.1.6 de su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, tiene competencia sobre el transporte por carretera que se desarrolle íntegramente en su ámbito territorial.

El Estado, de acuerdo con el artículo 149.1.21ª de la Constitución Española, tiene competencia exclusiva sobre los transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma, habiendo delegado dichas funciones en las Comunidades Autónomas, entre ellas en la Comunidad de Madrid, a través de la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los Transportes por Carretera y por Cable.

Con motivo de la sentencia del Tribunal Constitucional 118/1996, de 27 de junio, se declararon nulos los artículos 113 a 118 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, que regulaban el transporte urbano de viajeros, así como el párrafo 2, del artículo 2, al considerar que la regulación que hacía el Estado de los transportes urbanos comportaba una extralimitación competencial, la Comunidad de Madrid promulgó la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid en la que se regula el transporte urbano de viajeros y su coordinación con los transportes interurbanos siendo de aplicación a todos los transportes urbanos que se desarrollen íntegramente en el territorio de la misma.

El proyecto normativo propuesto viene a completar la regulación del transporte urbano realizado en la Comunidad de Madrid en la citada ley mediante la ordenación de los servicios de transporte prestados con vehículos destinados a la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor.

Le corresponde al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid la aprobación del anteproyecto de ley, que será remitida a la Asamblea, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.d) de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid.

En consecuencia, y a la vista de las cuestiones competenciales indicadas anteriormente, debe considerarse que el proyecto normativo se ajusta al orden constitucional de distribución de competencias.

4. IMPACTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO

a) Impacto presupuestario

La aprobación de esta modificación legal no comporta ningún impacto en los gastos e ingresos públicos de la Comunidad de Madrid.

b) Impacto económico

La regulación que se contiene en el proyecto normativo tiene impacto económico en la medida que se incorpora una actividad económica vinculada al

transporte de viajeros cuyo ámbito de actuación mayoritario se circunscribe en la actualidad a núcleos urbanos que, en el caso de la Comunidad de Madrid, se refiere a la ciudad de Madrid.

Hay que destacar que esta actividad en el momento actual por el volumen de autorizaciones domiciliadas en la Comunidad de Madrid de esta clase, puede generar cerca de 20.000 puestos de trabajo, directos e indirectos.

A la fecha de elaboración de la presente MAIN, de acuerdo con los datos obrantes en el Registro de Empresas y Actividades de Transporte, existen 1.376 empresas titulares de autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor, de las destaca que 854 cuentan con una autorización, 183 empresas son titulares de dos autorizaciones, 71 de tres autorizaciones, 105 de entre seis a diez autorizaciones, 34 con entre 21 a 40 autorizaciones, una empresa con entre 151 y 200 autorizaciones, 2 con entre 201 a 300 autorizaciones y una con entre 801 y 1000 autorizaciones, suponiendo el total 8.425 autorizaciones en alta y otras 508 en situación de estarlo cuando los titulares acrediten el cumplimiento de los requisitos antes de su visado.

Esta distribución es importante ya que las empresas con mayor número de autorizaciones son las que cuentan con mayor número de conductores, a lo que hay que añadir que no tienen fijado un tiempo máximo diario de trabajo, como ocurre en el sector del taxi, y, dado el uso al que someten los vehículos, son las que renuevan los vehículos en un menor plazo de tiempo, ya que el tiempo máximo en que los vehículos podrán estar dedicados a la actividad de arrendamiento con conductor será de 10 años.

Es decir, la antigüedad de los vehículos de las empresas con una sola autorización es mayor que las que cuentan con más autorizaciones.

De acuerdo con la normativa en vigor, las empresas podrán disponer de los vehículos a los que pretenda adscribir a autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor en propiedad, arrendamiento financiero o arrendamiento ordinario que, en su caso. Por ello, se trata de una actividad que afecta directamente al sector de la automoción (fabricantes, concesionarios,

repuestos) pero también a las compañías de seguros, empresas de renting y bancos, etc.

Teniendo en cuenta que, en la actualidad un porcentaje muy elevado de la actividad de arrendamiento con conductor se realiza en el ámbito urbano, el limitar la actividad al ámbito interurbano implicaría, en la práctica, la eliminación de esta actividad, con las consecuencias económicas que ello conllevaría para los sectores a los que afecta, así como la reducción drástica de los empleos que con la misma se generan.

5. DETECCIÓN Y MEDICIONES DE LAS CARGAS ADMINISTRATIVAS

El proyecto de decreto no conlleva cargas administrativas, pues, viene a establecer la regulación imprescindible para incorporar la actividad de arrendamiento con conductor en la normativa de la Comunidad de Madrid, habilitando a los titulares de los vehículos con autorización VTC-nacional a seguir realizando transporte urbano cuando transcurran las habilitaciones temporales previstas en el Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre.

En este sentido, si bien la norma que se propone, en el artículo 14.ter.1 condiciona la realización de servicios urbanos mediante la modalidad de transporte de arrendamiento de vehículos con conductor en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, a que sus titulares estén en posesión de la correspondiente autorización, en el apartado 2 del mismo artículo se dispone que procederá denegar el otorgamiento de nuevas autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor cuando la proporción entre el número de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor autonómicas otorgadas por el órgano competente de la Comunidad de Madrid, junto con las estatales habilitadas para prestar servicios urbanos, y el número de las autorizaciones concedidas para realizar transporte de viajeros en automóviles de turismo domiciliadas en la Comunidad de Madrid sea superior a una de aquéllas por cada treinta de éstas.

Por tanto, teniendo en cuenta las autorizaciones de la clase VT, a fecha de elaboración de esta MAIN, es de 15.772 y que el de VTC es de 8.425, la

proporción se encuentra muy superada, por lo que, hasta que la misma no alcanzase los valores de 1 a 30 no podrían otorgarse autorizaciones de las reguladas en el artículo 14 ter y por ello, se entiende que la norma no conlleva cargas administrativas no teniendo certeza de cuando las mismas vayan a poder otorgarse teniendo en cuenta la proporción descrita, por lo que no procede hacer una medición de cargas que no se sabe si van a producirse y, en su caso, cuándo.

6. IMPACTO DE CARÁCTER SOCIAL Y OTROS IMPACTOS

a) Impacto por razón de género

De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto por razón de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, de aplicación supletoria en la Comunidad de Madrid, y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para igualdad efectiva de mujeres y hombres, será preceptivo el informe por razón de género.

La competencia para el análisis del impacto por razón de género y la consecución de los objetivos de igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres corresponde, en virtud del artículo 13.1.c) del Decreto 208/2021, de 1 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, corresponde a la Dirección General de Igualdad.

b) Impacto de la norma sobre la familia, infancia y adolescencia

Teniendo en cuenta lo previsto en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, en relación con el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor es preciso recabar el informe del impacto en la familia, infancia y adolescencia.

De conformidad con el artículo del artículo 11.14 del Decreto 208/2021, de 1 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la

estructura orgánica de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, su emisión corresponde a la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad.

c) Impacto por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género.

De acuerdo con lo que se dispone en el artículo 45 de la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y en la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid es preciso recabar el informe de análisis de dicho impacto.

La emisión del informe por razón de orientación sexual e identidad y expresión de género, de acuerdo con el artículo 13.2.c) del Decreto 208/2021, de 1 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, corresponde a la Dirección General de Igualdad.

d) Otros Impactos

Impacto sobre la unidad de mercado y la competencia

El proyecto normativo, por su contenido y ámbito de aplicación, no tiene incidencia alguna en la unidad de mercado, al no implicar ninguna obstaculización a la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio nacional, ni introducir desigualdad en las condiciones básicas del ejercicio de la actividad económica, cumpliéndose lo previsto en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM), sin perjuicio de someter el ejercicio de la actividad a la obtención de una autorización.

Como se expone en la parte expositiva de la propia Ley:

«La autorización es el instrumento adecuado para garantizar la competencia competitiva en los casos donde existe una limitación del número de

*operadores del mercado por.....la prestación de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas, incluidos aquellos cuya prestación necesita la utilización del dominio público o porque se trate de servicios que puedan poner en riesgo su adecuada prestación, **como sucede por ejemplo, con el ejercicio de las actividades desarrolladas por el taxi y el arrendamiento de vehículos con conductor...**, que se consideran incluidas en la previsiones del artículo 17.1 de esta ley».*

Lo cierto es que aunque se trata de la parte expositiva que antecede a la normativa, pero no por ello carece de importancia ya que puede ser considerada como una fuente a utilizar por el órgano jurisdiccional a la hora de interpretar el sentido o finalidad que el legislador pretendía cuando dictó la norma.

Por otra parte, el artículo 17.1 prevé la posibilidad de establecer la exigencia de una autorización cuando concurren los principios de necesidad y proporcionalidad, y se considera que concurren estos principios pues en el apartado c) se expone:

«...c) Cuando la escasez de recursos naturales, la utilización de dominio público.....o en función de la existencia de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas, el número de operadores económicos del mercado sea limitado».

Como se observa, en este apartado se reproduce literalmente lo expuesto en la parte expositiva, en la que, además, cita de forma expresa, a modo de ejemplo, para que se interprete en el sentido que el legislador buscaba, que es el supuesto que ocurre con el ejercicio de las actividades desarrolladas por el taxi y el arrendamiento de vehículos con conductor. Además, el principio de eficacia en todo el territorio nacional, establecido en el artículo 20, para todas las actuaciones administrativas, queda excluido, según su apartado 4, *«cuando el número de operadores económicos en un lugar del territorio sea limitado en función de los servicios públicos sometidos a tarifas reguladas».*

En definitiva, teniendo en cuenta lo que antecede, se entiende que la exigencia de contar con una autorización para el ejercicio la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor es conforme a lo dispuesto en la

LGUM, por concurrir los principios de necesidad y proporcionalidad, conforme lo que se prevé en el artículo 17.1c) de la misma.

En el proyecto normativo que se propone, el arrendamiento de vehículos con conductor, queda encuadrado como una modalidad del transporte discrecional de viajeros cuyo ejercicio está condicionado a la obtención de una autorización cuya obtención queda sujeta al cumplimiento de los requisitos que se establezcan reglamentariamente. Respecto de las VTC-nacionales existentes a la entrada en vigor del proyecto, para poder realizar servicios de carácter urbano se prevé que deberán cumplir los que se establezcan reglamentariamente.

En relación a si el anteproyecto pudiera tener efectos sobre la competencia en relación a otras modalidades de transporte de viajeros prestados en vehículos de hasta 9 plazas, incluido el conductor, cabe destacar que la modalidad de transporte de viajeros en vehículos de arrendamiento con conductor opera en el mismo segmento de mercado que el transporte de viajeros en vehículos taxi.

En la modificación que se proyecta se establece, al igual que se venía recogiendo en la normativa estatal, que *«procederá denegar el otorgamiento de nuevas autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor cuando la proporción entre el número de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor autonómicas otorgadas por el órgano competente de la Comunidad de Madrid, junto con las estatales habilitadas para prestar servicios urbanos, y el número de las autorizaciones concedidas para realizar transporte de viajeros en automóviles de turismo domiciliadas en la Comunidad de Madrid sea superior a una de aquéllas por cada treinta de éstas»*.

Esta limitación cuantitativa a la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor, tiene su origen en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres que en el artículo 48.2 prevé *«... cuando la oferta de transporte público de viajeros en vehículos de turismo se encuentre sujeta a limitaciones cuantitativas en el ámbito autonómico o local, podrán establecerse limitaciones reglamentarias al otorgamiento de nuevas autorizaciones*

habilitantes para la realización de transporte urbano en esa clase de vehículos como de las que habilitan para el arrendamiento de vehículos con conductor».

Y, en el apartado 3 del citado artículo, se prevé que, a fin de mantener el adecuado equilibrio entre la oferta de ambas modalidades de transporte, procederá denegar el otorgamiento de nuevas autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor cuando la proporción entre el número de las existentes en el territorio de la comunidad autónoma en que pretendan domiciliarse y el de las de transporte de viajeros en vehículos de turismo domiciliadas en ese mismo territorio sea superior a una de aquéllas por cada treinta de éstas, permitiendo que las comunidades autónomas que, por delegación del Estado, hubieran asumido competencias en materia de autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor, puedan modificar la regla de proporcionalidad, siempre que sea más restrictiva.

Esta regla se mantiene en la norma proyectada, si bien cabe destacar que, con las autorizaciones de arrendamiento con conductor que la Comunidad de Madrid, al igual que ha ocurrido en el resto de las comunidades autónomas, ha tenido que otorgar por el vacío normativo producido en la normativa estatal en el que no operaba esta proporción, motivo por el cual en el momento actual se encuentra muy superada.

El mantenimiento de la citada proporcionalidad viene determinada para procurar mantener un adecuado equilibrio entre la oferta de las modalidades de transporte de viajeros de arrendamiento de vehículos con conductor y de transporte de viajeros en taxi.

Ello es debido a que para el ejercicio de la actividad de transporte público de viajeros en vehículos de turismo, taxi, se precisan dos títulos habilitantes, la licencia municipal de autotaxi y la autorización de transporte interurbano (autorización VT), para la de los vehículos dedicados al arrendamiento con conductor sólo se precisa contar con ésta última (autorización VTC).

La licencia de autotaxi es otorgada por los ayuntamientos o entes competentes en el ámbito territorial en que haya de llevarse a cabo la actividad

y es a ellos a los que les corresponde la decisión del número de licencias de taxi en función de múltiples factores y el otorgamiento de la autorización de transporte interurbano corresponde al órgano autonómico competente en materia de transporte, por delegación de la Administración del Estado, y está condicionado a la posesión de la licencia municipal.

Las restricciones de las licencias de taxi establecidas por la administración local competente permite tomar la iniciativa respecto de la ordenación de la actividad de este tipo de transporte en su ámbito territorial pero debe ejercerse bajo la concurrencia de las circunstancias y presupuestos exigidos por la norma que deberán quedar suficientemente acreditados en el oportuno expediente administrativo (STS de 21 de mayo de 2007).

En base a lo anterior, dadas las limitaciones expuestas y, con el objeto de mantener un adecuado equilibrio entre la oferta de ambas modalidades de transporte se mantiene la citada proporción de 1/30, este equilibrio es conveniente y necesario al objeto de promover una competencia leal entre ambas, ya que las dos operan en el mismo ámbito territorial en directa competencia.

En la actualidad, para realizar transporte urbano de viajeros, en la modalidad de arrendamiento de vehículo con conductor, los vehículos sólo han de contar con una autorización de transporte interurbano (VTC) que les habilita para ello y no están sometidos a tarifas autorizadas, por lo que los vehículos no tienen que contar con aparato taxímetro ni módulo luminoso, y sus titulares pueden dedicar a la actividad cualquier modelo de vehículo de cualquier marca siempre que tengan una potencia igual o superior a 12 caballos de vapor fiscales (CVF) y una longitud máxima exterior de 4,60 metros, requisitos exigibles para el otorgamiento de las citadas autorizaciones.

Con la norma que se propone se establece la cobertura jurídica para un desarrollo posterior de los requisitos que deberán cumplir las empresas titulares de autorizaciones de la clase VTC-nacional para resultar habilitados para realizar transporte urbano, por lo que además de cumplir los que marque la normativa estatal, puesto que deberán conservar la autorización VTC, de ámbito nacional,

deberán cumplir los establecidos por la Comunidad de Madrid para resultar habilitadas para realizar transporte urbano, si bien en tanto no se lleve a cabo dicho desarrollo podrán seguir realizando servicios de este carácter cumpliendo las condiciones actuales.

No se prevén otros impactos.

7. DESCRIPCIÓN DE LATRAMITACIÓN

7.1. Declaración de la Tramitación por urgencia.

Con motivo de lo que se establece en el Real Decreto-ley13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento con conductor en el caso de que la Comunidad de Madrid no establezca una regulación al efecto, a la finalización de los plazos que en el mismo se disponen, los titulares de las autorizaciones de arrendamiento con conductor (VTC-nacional), domiciliadas en la Comunidad de Madrid, no podrán seguir prestando servicios urbanos.

Para evitar esta situación, y con el objeto de completar la regulación de la Comunidad de Madrid en relación con los transporte de viajeros en el ámbito urbano prestados en su territorio, la modificación de la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, fue incluida en el anteproyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid (Título IV, capítulo I), actualmente en tramitación por urgencia, mediante la cual, por un único procedimiento de tramitación, se incluye la modificación conjunta de múltiples normas al compartir todas ellas, además de sus fines específicos, objetivos comunes. Sin embargo, la complejidad de la regulación contenida en la modificación de la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, y, ante la necesidad de intentar armonizar las dos modalidades de transporte de viajeros que operan en el mismo segmento de mercado y procurar consensuar algunos extremos contenidos en ella con los sectores afectados, se procedió a su retirada del citado anteproyecto de ley.

Manteniéndose las razones de urgencia que justificaban su tramitación por esta vía en el citado anteproyecto y, teniendo en cuenta que, en otro caso, al no contar con el tiempo necesario para tramitar la modificación de la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, por el procedimiento ordinario, pues, a partir de octubre de 2022, las autorizaciones de arrendamiento de vehículo con conductor domiciliadas en la Comunidad de Madrid solo podrían realizar servicios de carácter interurbano, con el consiguiente perjuicio para los usuarios de este tipo de servicios en el ámbito urbano, y teniendo en cuenta la concurrencia de circunstancias extraordinarias, a fin de salvaguardar la seguridad jurídica de los afectados por la normativa en la materia, a propuesta de la Dirección General de Transportes y Movilidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 52/2021, por Orden del Consejero de Transportes e Infraestructuras de fecha 16 de febrero de 2022 se declaró la tramitación por urgencia del procedimiento de elaboración y aprobación del anteproyecto por el que se modifica la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid.

Cabe destacar, que la tramitación urgente de la disposición aunque supone prescindir del trámite de consulta pública previa, y que los plazos de los distintos trámites se reduzcan a la mitad; sin embargo el proyecto ya había sido sometido a consulta pública, con fecha de publicación el día 12 de febrero de 2021, en el periodo comprendido desde el 13 al 17 de febrero de 2021.

7.2. Trámite de consulta pública

El trámite de consulta pública está previsto en los artículos 4 y 5 del Decreto 52/2001, de 24 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula y simplifica el procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas de carácter general en la Comunidad de Madrid.

El proyecto fue sometido a consulta pública, con fecha de publicación el día 12 de febrero de 2021, en el periodo comprendido desde el 13 al 17 de febrero de 2021.

Las aportaciones realizadas en este trámite fueron muy numerosas, se pueden resumir en las siguientes:

- Hay un grupo numeroso, unas 39 aportaciones, que son contrarios a que se regule esta actividad por entender que afecta y va en contra del sector del taxi y en muchas se manifiesta que se mantenga la proporción 1/30 (una autorización VTC por cada 30 autorizaciones VT, Taxi, que se mantiene en el proyecto normativo.
- Por parte de asociaciones de empresas de arrendamiento de vehículos con conductor y plataformas se realizan aportaciones en relación a cuestiones que no se contemplan de forma concreta en el proyecto sino que se dejan para su desarrollo reglamentario, entre las que se encuentran el no ejercicio de la actividad, el porcentaje de los vehículos adaptados y la profesionalización del sector.
- Asimismo, se realizan aportaciones conjuntas de titulares de autorizaciones con interés en que se regule la actividad en la Comunidad de Madrid y se manifiestan en contra de que solo se habilite a las autorizaciones que se encuentren en situación de alta en el Registro de Empresas y Actividades de Transporte y de la posibilidad de revocar las autorizaciones por acumulación de sanciones, así como la posibilidad de la transmisión de la autorización habilitada para realizar transporte urbano lo que no se prevé en la norma que se proyecta.

También se manifiesta el interés en la evolución de la normativa en materia de VTC y que estas autorizaciones puedan seguir operando en el ámbito urbano, profesionalizar el sector, exigir requisitos medioambientales, adaptar el régimen sancionador a esta nueva categoría de transporte discrecional de viajeros, todo ello no previsto en el proyecto normativo.

Se manifiestan en contra de la posibilidad de que se contemple la proporción 1/30, lo cual se contempla en el proyecto si bien se habilita a todas las autorizaciones en alta en el momento de su entrada en

vigor, y solo a éstas, y se manifiestan en contra de las mismas cuestiones que las plataformas y asociaciones citadas en el último párrafo anterior.

- Se realiza la aportación de que se contemple el 5% de las autorizaciones VTC para vehículos adaptados, cuestión que se deja al desarrollo reglamentario.
- Por alguna plataforma de movilidad se hace la aportación de que no haya restricciones al número de autorizaciones, lo que no se recoge ya que se mantiene la proporcionalidad de una autorización VTC por cada 30 autorizaciones VT, aunque la regla actualmente no se cumple por las autorizaciones que han tenido que otorgarse por sentencia judicial. Además, se manifiestan en contra de la imposición de un tiempo mínimo de precontratación lo que tampoco se recoge en el proyecto normativo.
- Se solicita se prevea la prohibición de realización de transporte público de mercancías por carretera en vehículo turismo y un régimen sancionador que sancione tanto al prestador de los mismos como a la empresa que los contrate; régimen sancionador que se recoge en la iniciativa normativa.
- Se solicita que en el proyecto normativo se refuerce el transporte público en autobús, aportación que no se recoge por no ser objeto de la modificación.

7.3. Trámite de audiencia e información públicas.

El trámite de audiencia e información públicas se realizará en el Portal de Transparencia, de conformidad con los artículos 9 y 11.3.b) del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula y simplifica el procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas de carácter general

en la Comunidad de Madrid y el artículo 60 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid.

7.4. Informes.

El artículo 8 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, establece que la solicitud de informes preceptivos, incluido el informe de coordinación y calidad normativa, así como los estudios y consultas que se estimen convenientes se realizarán de forma simultánea, salvo los informes que, en su caso, deban emitir la Abogacía General y el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid.

Se recabarán los siguientes informes:

- Informe de coordinación y calidad normativa de la Secretaría General Técnica Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.3.a) del Decreto 191/2021, de 3 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior.

- Observaciones de las secretarías generales técnicas de las diferentes consejerías, de conformidad con el artículo 4.3 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo.

- Informes de impacto de carácter social, en el sentido señalado en el apartado 6 de esta MAIN.

- Informe del Consejo de Consumo, de acuerdo con el artículo 4.1.e) del Decreto 1/2010, de 14 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid.

- Informe del Comité Madrileño de Transporte por Carretera, de conformidad con lo previsto en el artículo 2 del Decreto 2/2005, de 20 de enero, por el que se crea el Comité Madrileño de Transporte por Carretera y se regula el Registro de Asociaciones Profesionales de Transportistas y de Empresas de

Actividades Auxiliares y Complementarias del Transporte con implantación en la Comunidad de Madrid.

- De la Secretaría General Técnica de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8.5 del Decreto 52/2021, de 24 marzo.

- De la Abogacía General, conforme a lo dispuesto en el artículo 4.1.a) de la Ley 3/1999, de 30 de marzo, de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid.

Madrid, a fecha de la firma

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD